

## AMPARO

*De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por Emigdio Ramos, contra el C. Gefe político de la capital de ese Estado, que lo juzgó y sentenció á muerte como salteador.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Al Juzgado de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que acordado por la Suprema Corte de Justicia que se devolviera este juicio de amparo promovido por Emigdio Ramos, para que sustanciándolo conforme á la ley, se pronuncie la sentencia concediendo ó negando el amparo, y que en caso de que el solicitante no lo quiera seguir, obre con arreglo á derecho; en cuya virtud el Juzgado dictó el auto de 31 del mes próximo pasado, haciendo saber el contenido del oficio de la Suprema Corte de Justicia, y que conforme á la ley de 20 de Enero de 1869 se remitiera copia del ocuro del quejoso al C. Gefe político de esta Ciudad, á fin de que en el término de tres días informara sobre su contenido con justificación y se diera traslado al Promotor para que pidiera lo conveniente, por lo que manifiesta: que del informe del funcionario responsable, consta: que suspenso en sus funciones de Gefe político el C. Trinidad Acuña, fué nombrado para sustituirlo por el gobierno del Estado con el carácter de interino, de cuyo nombramiento remite copia certificada; y que respecto de la sustanciación del acto formado contra el reo por delito de salteamiento, fué remitido á la aprobación del Supremo Gobierno, según dispone el artículo 5º de la ley de 18 de Mayo de 1871; que la gefatura no ejecutó la sentencia de muerte á que fué sentenciado el reo, pendiente de la aprobación del superior, quien tuvo á bien conmutar la pena al reo en la de un año de presidio,

según consta de la copia certificada de la ejecutoria.

Por lo expuesto, en vista de los documentos que remitió el C. Gefe político, de los que aparece, que su nombramiento fué hecho por el impedimento en que se halla el C. Acuña, por la suspensión en que está de dicho empleo por el gobierno del Estado en uso de la facultad que le concedió el decreto de 6 de Noviembre de 1871, y que condenando el reo á la pena de muerte le fué conmutada en la de un año de presidio por el Gobierno Supremo, en virtud de la atribución que le otorga la fracción 9ª del artículo 39 de la Constitución del Estado, el Promotor fiscal, es de opinión: que la solicitud del quejoso no está en el caso de la fracción 1ª del artículo 1º de la ley orgánica, por lo que de conformidad con ella pide, se sirva el Juzgado declarar que no ha lugar al amparo solicitado por Emigdio Ramos, porque sentenciados por las autoridades legítimas, no hay violación de sus garantías individuales y políticas en que funda su recurso, y mucho menos cuanto que la pena de muerte se le ha mudado en la de un año de presidio.—Zacatecas, Abril de 1873.—Firmado.—*Jesus M. Licona.*

Es copia. Zacatecas, Abril 25 de 1873.—*Jesus M. Licona.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Zacatecas, Abril 23 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido por Emigdio Ramos, contra los actos del C. Gefe político de la Capital, que lo ha juzgado y sentenciado á la pena de muerte como salteador, conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, considerando el quejoso con ello, violada la garantía que protege el art. 16 de la Constitución general, por ser el nombramiento del actual Gefe político contra lo que dispone el art. 47 de la Constitución particular del Estado y el 104 del Regla-

mento Económico-político, infringiéndose además los arts. 41 y 109 de la citada Constitución general. Visto el auto en que se declaró que no había lugar á la suspensión provisional solicitada. Visto el informe justificado de la autoridad responsable, en que manifiesta, que como Gefe político interino ha sido nombrado legalmente conforme á las facultades que concede al Supremo Gobierno del Estado la ley de la Legislatura del mismo, fecha 6 de Noviembre de 1871, y que en todos sus procedimientos se ha ajustado á la ley general de 18 de Mayo del propio año. Visto el pedimento del C. Promotor fiscal en que demuestra, que no habiendo violación de garantías individuales, no es de concederse el amparo que solicita el quejoso. Visto el último alegato del solicitante; la citación para sentencia y las demás constancias de los autos. Considerando: que la base de este recurso, es la incompetencia del personal de la Jefatura política, por ser su nombramiento contra la Constitución del Estado y sus leyes secundarias, cuya base está destruida por la ley citada de 6 de Noviembre de 1871: que aun en el caso de ser el nombramiento del C. Cruz García Rojas, ilegal y contrario á la repetida Constitución y leyes secundarias, las autoridades federales no están establecidas para la vigilancia y cumplimiento de aquellas leyes, ni para resolver si estas son ó no contrarias á la Constitución particular, la cambian ó reforman legal ó ilegalmente, porque los juicios de amparo no tienen ese objeto, sino solamente proteger las garantías individuales que señala la Constitución general: que las autoridades federales no deben mezclarse en el régimen interior de los Estados, ni atacar su soberanía, resolviendo si sus autoridades son ó no legítimas, y que el quejoso no niega el carácter de salteador por el que ha sido juzgado conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871; de conformidad con los anteriores fundamentos, lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869 y lo pedido por el C. Promotor fiscal, sen-

tonciando en definitiva este juicio, el Juzgado resuelve:

1º Que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Emigdio Ramos, por no haberse violado en su persona la garantía que protege el art. 16 de la Constitución general de la República, con los procedimientos del C. Gefe político de esta Capital, que lo juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871 como salteador, condenándolo á la última pena.

2º No se impone al quejoso la multa que señala la ley, por su notoria insolvencia,

3º Se advierte al C. Promotor fiscal, por no haber presentado su alegato como lo dispone el acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de 9 de Octubre del año próximo pasado.

4º Remítanse los autos en revision á dicha Suprema Corte de Justicia; publíquese este auto en el periódico oficial del Estado, y sáquense las copias respectivas para el Semanario Judicial. Hágase saber. El C. Juez de Distrito del Estado, lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Es copia que certifico. Zacatecas, Abril 23 de 1873.—*Luis G. Chavez*, secretario.

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia*

México, Mayo 28 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por Emigdio Ramos, contra los actos del C. Gefe político de la Capital, que lo ha juzgado y sentenciado á la pena de muerte como salteador, conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, estimándose por el quejoso violadas las garantías que otorga el art. 16 de la Constitución general, por ser el nombramiento de dicha autoridad contra lo que dispone el art. 47 de la Constitución particular del Estado, y el 104 del reglamento económico-político, infringiéndose ade-

mas los arts. 417 y 109 de la citada Constitucion. Vistas las constancias de autos y considerando: que la base que ha servido al quejoso para entablar el presente recurso, es la incompetencia del personal de la Jefatura política por su nombramiento contra la Constitucion del Estado y sus leyes secundarias, cuya base está destruida por la ley de 6 de Noviembre de 1871 expedida por el Congreso del Estado.

Considerando: que el quejoso no niega su calidad de salteador, la autoridad responsable del acto reclamado ha obrado en la órbita de sus atribuciones, tanto al avocarse el conocimiento de esta causa, como al ajustar sus procedimientos á la referida ley de 18 de Mayo de 1871, sin que sus actos importen violacion alguna de las garantías aducidas por el quejoso en su peticion de amparo. Por tales fundamentos y los propios y legales de la sentencia que se revisa, se decreta: que es de confirmarse y se confirma en la parte que dice: "La Justicia de la Union no ampara ni protege á Emigdio Ramos, por no haberse violado en su persona la garantía que protege el art. 16 de la Constitucion general de la República, con los procedimientos del C. Jefe político de esta Capital, que lo juzgó conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871 como salteador, condenándolo á la última pena."

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 23 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Jalisco por Trinidad Jacobo, contra el C. Vicente Silva, presidente del Ayuntamiento de Quitupan, por la orden que dió para que se derribara la casa del quejoso.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Guadalajara, Mayo 19 de 1873. Vistos: El C. Trinidad Jacobo, vecino de Quitupan, entabló ante este Juzgado juicio de amparo y proteccion de garantías, exponiendo: que el presidente del Ayuntamiento de aquel pueblo le destruyó una finca urbana, compuesta de tres piezas que le pertenecian en propiedad, con lo que se le atacó la garantía que asegura el artículo 27 de la Constitucion general.

Este Juzgado comisionó al Juez de 1ª instancia de C. Guzman para que sustanciara el juicio promovido por el C. Jacobo hasta ponerlo en estado de sentencia, librándose al efecto el correspondiente exhorto. Aquel Juzgado, obrando con una negligencia inexcusable, no sustanció el juicio con la brevedad que demanda su naturaleza, dejando pasar desapercibidos los términos marcados por la ley y aun teniendo por parte al funcionario contra quien procede la queja, que no lo es sino para informar, lo que ha ocasionado su retardo para que este juicio hubiese terminado á su debido tiempo.

De todo lo practicado resulta, aun por el informe del Ayuntamiento de Quitupan, que el hecho de que se queja Trinidad Jacobo es cierto, pues las razones que alega aquel funcionario no justifican su procedi-